

Proyecto de ley que modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.

Boletín 10162-05

Tramitación	Discusión Mixta
Urgencia	Discusión Inmediata
Discusión	Informe Mixta
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Mensaje
Autores	Ejecutivo

Sugerencia de votación: A favor.

Objetivo del Proyecto

El proyecto busca fortalecer la confianza en los mercados, con el objeto de propender a su buen funcionamiento en un marco de competencia leal y ética en el que no existan abusos de sus participantes. Para tal efecto se proponen modificaciones a las leyes N° 18.045, de Mercado de Valores, y N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, con el propósito de perfeccionar el marco regulatorio vigente para sancionar conductas abusivas, brindar mayor protección a los accionistas minoritarios y a los inversionistas, clarificar las responsabilidades de los auditores externos y fortalecer el rol de Supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Antecedentes

El proyecto ingresó al **Senado** el 1 de julio del 2015. El 16 de mayo del 2017, la sala del Senado aprobó la idea de legislar con el voto favorable de 22¹ senadores y ningún voto en contra. El proyecto fue aprobado en particular con el voto favorable de los 25 senadores presentes, sin voto en contra, el 23 de abril del 2019.

En su segundo trámite constitucional en la **Cámara de Diputados**, el proyecto fue aprobado en general por 137 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones y en particular por diversas mayorías, el 15 de octubre del 2020.

En su tercer trámite, el **Senado** rechazó las modificaciones presentadas por la Cámara, por la unanimidad de los Senadores presentes (25 votos a favor del informe de Hacienda²). Debido a lo anterior se formó una **Comisión Mixta** con la finalidad de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras.

¹ La Senadora Von Baer votó a favor.

² La Senadora Von Baer votó a favor.

Comisión Mixta

En la discusión del proyecto en la Comisión Mixta se discutió sobre las discrepancias entre ambas Cámaras en una extensa discusión, la cual contó con el trabajo coordinado de los Senadores con el Ejecutivo, quien presentó varias indicaciones que fueron aprobadas unánimemente.

Principales acuerdos alcanzados:

1. Normas sobre límite de intereses:

- Se prohíbe cobrar el interés del préstamo, es decir el remuneratorio, y el interés moratorio al mismo tiempo.
- Se elimina el interés sobre intereses en caso de atraso en el pago (anatocismo).
- Se aprobó la creación de un sistema de consulta de seguros online, donde los usuarios podrán ser informados de todos los seguros que tengan contratados. En relación a lo anterior, no se podrán contratar seguros que no tengan por objeto asegurar el pago de la deuda o la protección de bienes en garantía cuando se pide o renegocia un crédito.
- Además, se otorga la facultad a la Comisión para el Mercado Financiero, para regular las diversas comisiones que se cobran por parte de las entidades financieras. Los tope no regulados por la CMF tendrán como tope la tasa máxima convencional.

2. Denunciante anónimo y recompensa

- Se crea la figura del “denunciante anónimo”, para incentivar la entrega de información considerada clave y necesaria para la persecución de delitos del mercado de valores. Se otorga protección al denunciante de posibles represalias en su contra y se le hará entrega de una recompensa monetaria si su información permite sancionar delitos.
- La CMF deberá definir como se implementará esta figura de denunciante anónimo.
- No podrá ser denunciante el que se encuentre involucrado en los hechos, ya sea como partícipe o víctima.
- La identidad del denunciante será secreta, salvo que éste renuncie al anonimato.
- Si la información entregada por el denunciante resulta ser falsa o fraudulenta a sabiendas, el denunciante anónimo será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (541 días a 3 años y un día), además de una multa entre 6 y 10 UTM.

3. Asesores Previsionales

- Se divide la regulación actual distinguiendo entre asesores previsionales y los asesores financieros previsionales. Los asesores financieros previsionales son definidos como aquellos que no realizan atención personalizada, sino que la realizan mediante comunicación masiva con los afiliados mediante diversas plataformas (regulación de entidades como Felices y Forrados).

- Se crean dos registros, uno de los asesores previsionales y otro para los asesores financieros previsionales.

Comentarios

El proyecto de ley logró un consenso amplio durante su discusión en la comisión mixta, gracias a la participación del Ejecutivo y la presentación de indicaciones sobre las materias en discusión.

La iniciativa legal establece una serie de normas que van en directa protección del consumidor frente a las entidades financieras, incentiva la denuncia de prácticas que distorsionan el mercado de valores y regula los asesores previsionales. Esta última regulación se realiza gracias a las numerosas denuncias que han recibido una entidad asesora en materia previsional conocida como “Felices y Forrados”.

Con todo, es una iniciativa positiva por lo cual se recomienda su aprobación.

Proyecto de ley que implementa un Sistema táctico de Operación
Policial
Boletín 11705-25

Tramitación	Segundo trámite constitucional
Urgencia	Suma
Discusión	En general
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Mensaje
Autores	Ejecutivo

Sugerencia de votación: A favor

Objetivo del Proyecto

Este proyecto de ley tiene por objetivo establecer una metodología de trabajo policial que reduzca los índices de delincuencia de manera dinámica y multidisciplinaria, y promover el uso de herramientas tecnológicas que permitan compartir entre las unidades policiales información sobre casos delictuales y buenas prácticas para su resolución, así como prevenir su comisión.

Antecedentes

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 3 de mayo del 2018. Fue aprobado en general y particular por la Sala de la Cámara de Diputados el 12 de diciembre del mismo año. El proyecto fue aprobado con 127 votos a favor, 9 votos en contra y 2 abstenciones.

En su segundo trámite constitucional el proyecto fue discutido y aprobado en general por la Comisión de Seguridad Pública, con el voto favorable de los senadores Harboe, Insulza, Kast y Perez y la abstención de Huenchumilla.

Contenido

El proyecto consta de tres artículos permanentes y dos artículos transitorios.

Ideas Centrales

1. Se crea un Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) que es administrado por Carabineros de Chile, con la finalidad de transparentar y optimizar la gestión táctica policial orientada a prevenir la comisión de delitos.
 - Forman parte del STOP en calidad de participantes:

- a. Ministerio del Interior y Seguridad Pública
 - b. Ministerio Público
 - c. Carabineros de Chile
 - d. Municipalidades
- El Sistema busca que todas estas entidades se coordinen y contribuyen en la prevención y disminución de hechos delictuales.
2. Este Sistema empleará una plataforma de información estadística de:
- a. Delitos cometidos contra las personas.
 - b. Delitos cometidos con violencia o intimidación.
 - c. Delitos contra la propiedad.
 - d. Delitos que determine el reglamento elaborado por Carabineros de Chile.
3. Se celebrarán sesiones con la finalidad de analizar la información para la adopción de acuerdos con miras de focalización de la acción preventiva. Estas sesiones deberán ser celebradas al menos una vez al mes.
4. Un modelo de gestión por resultados evaluará el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades que asistan a las sesiones.
5. La información obtenida por el Sistema será pública y deberá estar disponible a la ciudadanía, salvo norma en contrario.

Comentarios

Este proyecto iniciado por el Ejecutivo tiene como principal beneficio la coordinación entre Carabineros de Chile y las demás entidades participantes del STOP.

El proyecto ha recibido las siguientes críticas:

1. No se trata de materia de ley: el Senador Huenchumilla a criticado fuertemente el proyecto señalando que no es materia de ley, y que fácilmente puede ser regulado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Sin embargo, es importante destacar que la única forma de hacer obligatoria la creación del Sistema y las sesiones de coordinación, es mediante la dictación de una ley. De lo contrario, todo el sistema será voluntario y no producirá los resultados deseados.
2. Participación del Ministerio Público: el Senador Huenchumilla criticó el proyecto señalando que la participación del Ministerio Público podría afectar el principio de autonomía y objetividad que rige su actuar. Sin embargo, cabe mencionar que el Ministerio Público sólo actúa como participante, y que en ningún caso se afecta su competencia para perseguir e investigar la realización de delitos. Lo único que hace el proyecto es establecer un mecanismo mediante el cual pueda existir comunicación y coordinación para la prevención de la comisión de delitos.

El proyecto, además, se hizo cargo todas las críticas que se le formularon en la Cámara de Diputados, y por

ende se reconoce y contempla la participación civil, y se amplía el catalogo de delitos para no sólo abarcar delitos contra la propiedad.

Por lo anterior, se recomienda votar a favor de la idea de legislar.

Proyecto de ley sobre acoso sexual

Boletín 11907-17

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Isabel Allende, Juan Ignacio Latorre, Adriana Muñoz, Ximena Ordenes y Ximena Rincón.

Sugerencia de votación: A favor.

Objetivo del Proyecto

Este proyecto de ley tiene por finalidad sancionar penalmente, como complemento de la normativa laboral, la conducta de acoso sexual en el ámbito de relaciones de trabajo, educacionales o docentes, militares, deportivas, de prestación de servicios, de subordinación o en el cumplimiento de funciones públicas.

Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 12 de julio de 2018 y fue discutido por la Comisión Mujer y la igualdad de género. El proyecto fue aprobado en dicha comisión, en general, con el voto favorable de las Senadoras Aravena, Muñoz y Provoste.

Contenido

El proyecto de ley consta de un artículo único, que modifica el Código Penal. La iniciativa legal propone las siguientes ideas centrales:

1. Modificar el delito de prevaricación, para establecer que incurren en ésta los miembros de tribunales de justicia y los fiscales judiciales que soliciten favores de naturaleza sexual o afectiva a una persona imputada o que litigue con ellos.
2. Sancionar el delito de abusos contra particulares, al empleado público que acosare sexualmente a persona que tenga solicitudes pendientes de su resolución o acerca de las que deba evacuar un informe o elevar una consulta a su superior.
3. Modificar el tipo penal (acoso sexual) cuando el sujeto pasivo (víctima) es una persona sujeta a guarda del empleado público en razón de su cargo.
4. Sancionar al que solicite favores de índole sexual, ya sea para sí o un tercero, en el ámbito de una relación de subordinación o haga comentarios, bromas, insinuaciones, gestos libidinosos o sugestivos sexualmente.

Comentarios

El proyecto de ley busca sancionar el acoso sexual que ocurre en diferentes áreas de la vida, ya sea en la relación laboral, educacional, deportiva, de salud etc.

Es menester que se analice profundamente la proporcionalidad entre la conducta sancionada y la pena que se asigne al que realice dichos actos. Se sanciona a quien realice bromas, insinuaciones o gestos de carácter sexual, lo que deberá ser definido y delimitado explícitamente para que sea clara la norma, aunque en la práctica parece ser difícil de ser implementado. Por lo anterior, resulta ser clave la discusión en particular del proyecto para delimitar el alcance del ella, para que no sea un texto de buenas intenciones y que tengan aplicabilidad en la realidad.

Si bien se requiere de un análisis más profundo en su discusión en particular, el proyecto es positivo y va en la dirección correcta, por lo que se sugiere votar a favor de ella.

Proyecto de ley que sanciona penalmente a los mayores de edad que inciten a delinquir a niños, niñas y adolescentes o participen con éstos en la comisión de delitos.

Boletines 11966-07 y 11958-07

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Discusión Inmediata
Discusión	En general y en particular
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Senadores: Ossandón, Prohens, Allende, Elizalde e Insulza.

Sugerencia de votación: Aprobar

Objetivo del Proyecto

Tal como señala el informe, el proyecto de ley en discusión tiene por objetivo proteger a los niños, niñas y adolescentes de las influencias negativas que sobre ellos ejercen los mayores de edad, al hacerlos responsables de la utilización de menores para sus actividades delictivas y preservar el bien jurídico del resguardo de la infancia, entendido como el derecho que tienen niños, niñas y jóvenes a vivir una vida segura y sana y a salvo de cualquier clase de abuso, maltrato o negligencia.

Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 1 de agosto del 2018. El proyecto fue aprobado unánimemente por la Comisión de Seguridad Pública el 26 de agosto del 2020.

Contenido

El proyecto de artículo único modifica el artículo 72 del Código Penal.

El proyecto establece que cuando un mayor de edad ocupa la intervención de menores de edad en la comisión de un delito, éste no puede acceder al minimum o el grado mínimo de la pena señalada para ese delito. Cabe recordar que el juez al establecer una pena, tiene un rango dentro del cual puede establecer la pena. En este caso, el juez no podrá aplicar la pena menor, y estará obligado a elevar la posible sanción

Además, la iniciativa contempla un agravante consistente en elevar en un grado la pena al mayor de edad, cuando éste valga, engañe, utilice, induzca, fuerce o coaccione a un menor de edad a cometer o perpetrar un crimen o simple delito.

Comentario

Este proyecto busca agravar las sanciones que se aplican a los adultos que cometen un delito con la participación de menores de edad. Es común ver delincuentes experimentados utilizar a menores de edad en la comisión de distintos delitos, ya que estos últimos son inimputables o tienen un régimen de responsabilidad especial.

El artículo 27 actual de nuestro Código Penal no es utilizado por contener deficiencias en su redacción, por lo que en la práctica no se agravaba la pena de quienes utilizan a los menores de edad para cometer delitos.

Por lo anterior, se sugiere votar a favor de la iniciativa legal.

Proyecto de ley sobre eficiencia energética. Boletín 12058-08.

Tramitación	Informe Comisión Mixta
Urgencia	Discusión inmediata
Discusión	Comisión Mixta
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Mensaje
Autores	Ejecutivo

Sugerencia de votación: A favor

Objetivo del Proyecto

El proyecto tiene por finalidad promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, para contribuir a mejorar la productividad, la competitividad económica y la calidad de vida de las personas y reducir las emisiones contaminantes.

Antecedentes

El proyecto en su primer trámite constitucional fue aprobado en general por la Sala del Senado el 24 de abril del 2019, con 35 votos a favor y 1 pareo.

Asimismo, la Sala del Senado aprobó en particular el proyecto de ley el 22 de octubre del 2019, con 24 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención.

La Cámara de Diputados aprobó en general con 130 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones, y en particular el 17 de marzo del año en curso, con modificaciones.

El Senado en su tercer trámite constitucional aprobó el proyecto de ley aprobó las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley sobre eficiencia energética con excepción de las siguientes, que rechazó:

- La que consiste en incorporar un artículo 8°, nuevo.
- La que propone agregar, en el artículo primero transitorio, un inciso segundo, nuevo.

Por lo anterior se conformó una Comisión Mixta para lograr un texto consensuado entre ambas Cámaras.

Contenido

El proyecto de ley consta de 9 artículos permanentes y 8 artículos transitorios:

Artículo 1º

Este artículo busca establecer una mirada a largo plazo, exigiendo al Ministerio de Energía que elabore un Plan Nacional de Eficiencia Energética cada 5 años, el cual deberá ser sometido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Este plan deberá establecer metas de reducción para los Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía, y podrá diferenciar según el sector, el nivel de consumo de energía u otras variables que determine el Ministerio de Energía. Cada ministerio que tenga relación con la normativa de eficiencia energética deberá realizar un informe de actualización de dicha normativa, el que será remitido al Ministerio de Energía y publicado en su página web.

Artículo 2º Gestión de Energía en el Sector Privado.

Todas las empresas que tengan un consumo de energía relevante, deberán reportar al Ministerio de Energía sus consumos de energía. Estas empresas deberán implementar un sistema de gestión de la energía (SGE) en sus instalaciones. Además, estas empresas estarán obligadas a informar de forma anual, sus consumos de energía, las oportunidades y acciones de eficiencia energética además del cumplimiento de su SGE.

En la Cámara de Diputados se amplió el rango de empresas que deben reportar el consumo de sus energías. Originalmente sólo debían informar aquellas empresas que tenían un consumo final o superior a 50 tera-calorías al año y se establecerá mediante Decreto Supremo los criterios para determinar las empresas obligadas cumpliendo los siguientes requisitos:

1. No pueden incluir empresas de menor tamaño.
2. Deben estar incluidos todas las empresas con un consumo final igual o superior a 50 tera calorías al año.

Se modifica el guarismo para determinar quienes son Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía, disminuyéndolo desde 100 a 50 tera-calorías al año.

Artículos 3 y 4

Las edificaciones residenciales nuevas deberán obtener, para su comercialización, la Calificación Energética de viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Director De Obras Municipales deberá dejar constancia de la obligación en el permiso de edificación.

Artículo 5 Gestión de energía en el sector público.

Las entidades de la administración del Estado deberán medir y reportar sus consumos de energía y contar con gestores energéticos, que deberán ser capacitados además de llevar el contacto entre el inmueble y el Ministerio de Energía.

Artículo 6º Vehículos Eléctricos

El Ministerio de Energía deberá velar por la interoperabilidad del sistema de recarga de energía para vehículos eléctricos. Para ello se les otorga la facultad de dictar estándares, reglamentos y de exigir información pertinente para cumplir con la interoperabilidad.

Artículos 7 y 9

Se entrega atribuciones al Ministerio de Energía y al Ministerio de Transporte para fijar estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos motorizados nuevos. Se declara al hidrógeno, como combustible y el Ministerio de Energía tendrá la facultad para regular su tratamiento.

Artículo 8

Se otorga la facultad al Servicio de Impuestos Internos para establecer que vehículos eléctricos de empresas puedan tener depreciación acelerada por un periodo de 10 años siguientes a la entrada en vigencia de la ley.

Comisión Mixta

La Comisión Mixta fue conformada para resolver las siguientes divergencias entre ambas Cámaras:

Artículo 8º

El artículo 8º establecía beneficios e incentivos para el uso de automóviles eléctricos. Se rechazó el artículo con la finalidad de que se incluyera otros automóviles cero emisiones, como aquellos que ocupan hidrogeno verde. La propuesta nueva del ejecutivo incluye el uso de otras tecnologías nuevas, como el hidrogeno verde, la cual fue aprobada unánimemente.

Inciso 2º artículo 1º transitorio

La meta de reducción no estaba considerada en el proyecto original ni en el texto aprobado por el Senado, por lo que fue rechazada el inciso 2º artículo 1º transitorio.

El Ejecutivo propuso que el primer Plan de Eficiencia Energética contemple una meta de reducción de la intensidad energética del país del 10% al año 2030, respecto del año 2019.

Comentarios

El proyecto de ley es sumamente positivo, ya que nos obliga como Estado a tener un plan hacia el futuro respecto de la eficiencia energética. Además, se consagran normas relacionadas a la eficiencia energética tanto del sector público como privado.

En el sector privado, se establece la obligación de ciertas empresas de alto consumo energético de informar al Ministerio sobre su consumo y de lograr una mayor eficiencia energética. En cuanto a las edificaciones residenciales nuevas, deberán cumplir con ciertos requisitos y estándares que exija el Ministerio de Energía y el de Vivienda para obtener la calificación que les permita vender los inmuebles.

En el sector público, se establece la obligación para los edificios de la administración del estado, de medir y reportar sus consumos energéticos, y de contar con un gestor energéticos para lograr una mayor eficiencia energética.

El Ministerio de Energía deberá velar por la interoperabilidad del sistema de recarga de vehículos eléctricos, así como de fijar los estándares de eficiencia energética para el parque automotriz de todos los vehículos nuevos. En esta misma línea, el proyecto consagra el hidrógeno como un combustible, y le faculta al Ministerio para regular su tratamiento.

Se sugiere votar a favor de la iniciativa.

Proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Boletín 12.250-25

Tramitación	Tercer trámite constitucional
Urgencia	Suma
Discusión	Discusión única
Sugerencia votación	En contra de las modificaciones de la Cámara de Diputados
Origen de la Iniciativa	Mensaje
Autores	Ejecutivo

Sugerencia de votación: Rechazar modificaciones

Objetivo del Proyecto

Tal como señala el informe, el proyecto de ley en discusión tiene por objetivo propender a la modernización de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y al fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad, mediante la incorporación de sistemas y protocolos de estrategia y gestión operativa que garanticen el control institucional, gubernamental y ciudadano de las instituciones policiales.

Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 20 de noviembre de 2018 y fue aprobado en general por la unanimidad de los Senadores presentes (37 votos a favor) el 9 de enero del 2019. El 15 de octubre del 2019, se aprobó en particular el proyecto también unánimemente con 37 votos a favor.

En su segundo trámite constitucional, el proyecto fue aprobado en general en la Cámara de Diputados el 24 de septiembre del 2020 (102 votos a favor, 3 votos en contra y 34 abstenciones). Luego el 1 de octubre del 2020 el proyecto fue aprobado en particular con modificaciones.

Contenido

El proyecto de ley fue modificado en la Cámara de Diputados, destacando los siguientes cambios:

1. Por falta de quorum (LOC) se suprimieron los siguientes numerales:
 - a. Artículo 1º: numerales 1), 5), 6), 8), 11), 13), 14), 15), 16) y 17)
 - b. Artículo 2º numerales 2), 4) y 14).
 - c. Artículo 3º numeral 1
 - d. Artículo 4º y artículo 5º numerales 1) y 5)
2. Modificaciones pertinentes a **Carabineros de Chile**:
 - Se establece la obligación de Carabineros de Chile de informar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a las comisiones de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y de

Seguridad Pública del Senado, al menos semestralmente, la cantidad de personal de la institución.

- Se indica que Carabineros se encuentra autorizado para hacer el uso de la fuerza, pero que sólo debe emplearse en aquellos casos permitidos por ley, prefiriendo siempre la utilización de medios no violentos antes de recurrir a la fuerza.
- Se afirma que Carabineros debe proveer (dentro de lo posible) a sus funcionarios de equipamiento adecuado para el cumplimiento de sus funciones, especialmente un sistema de registro audiovisual de los procedimientos, así como elementos de protección personal. Nuevamente se consagra la obligación de informar a las comisiones de Seguridad Ciudadana de la Cámara y de Seguridad Pública del Senado, la disponibilidad presupuestaria y su ejecución en la adquisición y renovación de los elementos mencionados.
- Se señala la obligación de llevar un registro por parte de las autoridades de Carabineros, de todas las órdenes generales dictadas, la que deberá estar a disposición del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Contraloría General de la República.
- Se consagra la obligación del superior a cargo de un operativo policial de informar a sus subalternos sobre los riesgos, características y particularidades, para promover el desarrollo eficaz y el debido resguardo de los derechos de las personas.

3. Modificaciones pertinentes a la Policía de investigaciones de Chile

- Se consagra norma que reconoce la facultad del uso de la fuerza por parte de la PDI, pero siempre en los casos permitidos en la ley, y sólo cuando sea estrictamente necesaria, velando siempre emplear medios no violentos en lo posible.
- Se establece la obligación del Director General de elaborar el primer semestre de cada año, un Plan Anual de Gestión Operativa y administrativa que permita ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Desarrollo Policial vigente.
- Se contempla la obligación de la PDI de informar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a las comisiones de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y de Seguridad Pública del Senado, al menos semestralmente, la cantidad de personal de la institución, dando cuenta de su desagregación y cobertura, tanto a nivel regional como comunal.
- Se consagra la obligación del superior a cargo de un operativo policial, de informar a sus subalternos sobre los riesgos, características y particularidades, para promover el desarrollo eficaz y el debido resguardo de los derechos de las personas.
- Se afirma que la PDI deberá conservar, archivar y destruir la documentación que posea o esté bajo su control, responsabilidad o competencia, de acuerdo al reglamento que regule esta materia. Además, se consagra la obligación de digitalizar la información que obre en su poder.
- Nuevamente se consagra la obligación de informar a las comisiones de Seguridad Ciudadana de la Cámara y de Seguridad Pública del Senado, la disponibilidad presupuestaria y su ejecución en la adquisición y renovación equipamientos.
- Se establece la obligación del personal de la PDI de denunciar ante la autoridad los hechos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones que revisten el carácter de faltas administrativas.

Comentario

Cabe recordar que este proyecto de ley es fruto del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, convocada por el Presidente en junio del año 2018. Formaron parte del acuerdo miembros de diversos sectores políticos y personas del mundo civil.

Ante los hechos crecientes de violencia que han ocurrido desde el “estallido social” se hizo necesario una modernización de Carabineros y de la PDI. Este tema debe ser una prioridad de Estado y o un cierto sector político, y por lo mismo ha tenido un apoyo transversal el proyecto durante su tramitación.

Si bien el proyecto no representa una reforma profunda de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, si es el primer paso hacia tener instituciones modernas. El proyecto de ley hace especial énfasis en un “accountability” por parte de las instituciones, obligándolas a rendir cuenta ante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la Cámara de Diputados y al Senado.

Tomando en consideración que la Cámara de Diputados no reunió el quorum necesario para aprobar gran parte del proyecto, se recomienda rechazar todas las modificaciones realizadas, para que sean discutidas en su totalidad en una Comisión Mixta.

Proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación

Boletín 12748-17

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general
Sugerencia votación	En contra
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier, José Miguel Insulza, Juan Ignacio Latorre y Adriana Muñoz

Sugerencia de votación: En contra

Objetivo del Proyecto

El proyecto de ley tiene por finalidad modificar la ley N° 20.609 (Ley Zamudio) para fortalecer la prevención de la discriminación, promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra esta ley.

Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 3 de julio del 2019 y fue discutido en general y en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. La comisión aprobó la idea de legislar con 3 votos a favor y 2 abstenciones (de los Senadores Moreira y Kast), y en particular por diversas mayorías.

Contenido

El proyecto consta de tres artículos permanentes que modifican la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, el Código Penal y el Código del Trabajo.

Puntos centrales del proyecto de ley:

1. Se modifica el artículo 1 de la ley Zamudio para agregar que uno de los objetos de dicha ley es prevenir la discriminación arbitraria, y promover y garantizar el principio de igualdad.
2. Se modifica el artículo 2º de la ley Zamudio, para modificar la definición de discriminación arbitraria. Se agregan varios actos que se consideran como discriminación arbitraria.
 - Lo más problemático es que se considera ahora todo acto, práctica y/o tratamiento médico o de cualquier naturaleza que tenga por objeto modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas. La definición es tan amplia que podría atentar contra la libertad de culto, consagrado en nuestra constitución.
 - Se establece que la discriminación arbitraria en si mismo es una ofensa, es decir, no se requiere adicionalmente que vulnere un derecho consagrado en la constitución.

- Se elimina las excepciones que la ley Zamudio actual establece al principio de no discriminación, las que se amparaban en el ejercicio de derechos constitucionales. Estas excepciones eran razonables y permitía asegurar el legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales.

3. Se intenta copiar el artículo 493 del Código del Trabajo:

Artículo 493 del Código del Trabajo: *“Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.”*

Lo que hace el proyecto es invertir la carga de la prueba cuando existan indicios suficientes de la existencia de una acción u omisión de discriminación arbitraria. Es decir, será el denunciado quien deberá probar que no realizó la acción u omisión discriminatoria y no quien realiza la acusación.

- 4. Se aumentan las multas establecidas que puede fijar el juez en contra de personas que hayan cometido actos u omisiones de discriminación arbitraria.
- 5. Se establece el deber del juez de otorgar una indemnización de perjuicio a aquellas personas que hayan sido afectadas por un acto u omisión considerado discriminación arbitraria.
- 6. Se elimina la sanción que se imponía al recurrente (persona que acusa) que es vencido totalmente en juicio. El objetivo de esta sanción es impedir que se recurra a acusaciones falsas para dañar la imagen de otra persona.

Comentarios

El proyecto de ley busca a primera vista ser positivo, ya que busca prevenir y sancionar de mejor manera todos los actos de discriminación arbitraria. Sin embargo, al analizarlo un poco más en profundidad, podemos evidenciar que el proyecto de ley es peligroso, y que podrá ser utilizado de mala fe por personas que buscan sacar algún provecho en hacer denuncias de discriminación arbitraria.

En primer lugar, se amplía la definición de discriminación arbitraria y se elimina las excepciones que establece la actual ley Zamudio. El inciso final del artículo 2º de dicha ley establece que el ejercicio legítimo de los demás derechos fundamentales, no podrán ser considerados como “discriminación arbitraria”, en especial los siguientes derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República:

- 19 Nº 4: Respeto y protección a la vida privada.
- 19 Nº 6: Libertad de conciencia (libertad de culto)
- 19 Nº 11: Libertad de enseñanza
- 19 Nº 12: Libertad de emitir opinión.
- 19 Nº 15: Derecho a asociarse sin permiso previo.
- 19 Nº 16: Libertad de trabajo y su protección.
- 19 Nº 19: Derecho a sindicarse

Además, se señala que cualquier acto, práctica, tratamiento médico, de cualquier naturaleza, que tengan por objeto modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona será considerado como discriminación arbitraria. Es decir, se elimina la protección del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (excepción al principio de discriminación arbitraria), y se establece que cualquier acto que tenga por objeto modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género es considerado como discriminación arbitraria.

Esto claramente va dirigido a limitar el ejercicio de la libertad de culto, de la libertad de enseñanza y la libertad de opinión. Hay iglesias y colegios religiosos que enseñan que el homosexualismo no es algo genético, sino que se adquiere durante la vida y que es algo que se puede revertir. Este proyecto prohibiría que estas iglesias y colegios enseñen lo dicho anteriormente y que tengan cualquier acto para “corregir” dichas conductas.

En definitiva, el proyecto se amplió excesivamente tornando peligroso su aprobación. Se invierte la carga de la prueba asimilando la legislación de este tema a lo que establece el Código del Trabajo, se aumentan las multas al que comete un acto discriminatorio, pero se eliminan las multas al “litigante temerario”. En el intento de proteger a las víctimas de discriminación, se desprotege a personas que son acusadas falsamente, imponiéndole, además, la obligación de probar su inocencia.

La mayoría de la doctrina constitucional explica que los derechos fundamentales no debieran ser considerados jerarquizables, y que se debe buscar una armonía y equilibrio entre ellos. Sin embargo, aquí se pone sobre un pedestal el derecho fundamental a no ser discriminado arbitrariamente, vulnerando los demás derechos fundamentales. Lo que debería hacer la iniciativa, es lograr un equilibrio armonioso entre ellos.

Por lo anterior, se sugiere votar en contra del proyecto de ley.

Proyecto de ley que moderniza la Dirección del Trabajo

Boletín 12.827-13

Tramitación	Segundo trámite constitucional
Urgencia	Discusión inmediata
Discusión	En general y particular
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Mensaje
Autores	Ejecutivo

Sugerencia de votación: A favor

Objetivo del Proyecto

El objetivo de la presente iniciativa se puede resumir en tres grandes puntos:

1. Modificar las facultades de la Dirección del Trabajo (DT) en materia de mediación y fiscalización laboral, y tramitación electrónica.
2. Incorporar asignaciones de calidad de servicio, de turno, de responsabilidad y de dirección superior a los respectivos de la Dirección del Trabajo.
3. Crear la Unidad de Atención a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Antecedentes

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el martes 6 de agosto del 2019, y fue aprobado en general unánimemente (141 votos a favor) y en particular el 1 de diciembre del 2020.

En su segundo trámite constitucional, el proyecto fue aprobado en general y particular por la Comisión de Trabajo (unánimemente salvo el inciso primero del artículo 7º transitorio que tuvo voto en contra del Senadora Letelier). Además, se aprobó unánimemente los artículos pertinentes en la Comisión de Hacienda.

Contenido

El proyecto de ley consta de 15 artículos permanentes y 16 disposiciones transitorias.

Fiscalización Moderna

Con la finalidad de resguardar de mejor manera los derechos de los trabajadores, el proyecto establece lo siguiente:

1. **Compendio Anual de Dictámenes:** se establece la obligación de la Dirección del Trabajo de ir publicando en la pagina web de la institución, en enero de cada año, un compendio de dictámenes,

ordinarios, circulares y órdenes de servicio. Deben ser publicados según la materia que versan, y consignar la fecha en que fueron emitidos.

2. **Consultas Públicas:** se le otorga la facultad al Director del Trabajo para realizar consultas públicas, que no tienen el carácter de vinculantes, sobre instrucciones, pronunciamientos y demás normas de carácter general de la Dirección del Trabajo. La consulta deberá ser siempre remitida al Consejo Superior Laboral.
3. **Mejoras en el proceso de fiscalización:** se establece los criterios objetivos que deben ser considerados para la determinación del monto de las multas y sanciones asociadas a una infracción.
4. **Modernización de la gestión de la Dirección del Trabajo:**
 - a. Las comunicaciones y notificaciones entre el Servicio y los usuarios se realizarán por correo electrónico.
 - b. Se procede a la digitalización de documentos laborales para realizar una mejor fiscalización.
 - c. Se establecerá un registro en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo de los contratos de trabajo y sus terminaciones.
5. **Se crea la unidad de apoyo al emprendedor para las Mipymes del país.**
 - Se crea una unidad especial dentro de la Dirección del Trabajo, para actuar como “ventanilla única”, y que sirva de apoyo y orientación para las micro, pequeñas y medianas empresas.
 - Se propone, además, hacer una distinción respecto de las multas que se pueden cursar desde la DT hacia las micro y pequeñas empresas.
6. **Fortalecimiento de la mediación.**
 - Se define la mediación laboral y los tipos de mediación que existen.
 - Se refuerza la facultad de la Dirección del Trabajo para oficiar, citar o convocar a las partes a mediación voluntaria.
 - Se permite la convocatoria de asesores externos en ciertos casos, con el acuerdo de las partes intervinientes de la mediación, para apoyar al mediador en casos complejos.

Fortalecimiento de las normas de ingreso a la Dirección del Trabajo y a su planta.

1. **Creación de una nueva planta:**
 - Se otorga la facultad al Presidente de la República para fijar una nueva planta por medio de un Decreto con Fuerza de Ley. El número, escalafón y demás condiciones de ingreso quedan expresamente definidos en la ley.
 - Se determina la forma de ingreso a la planta y contrata, fijando las condiciones y requisitos que deberán cumplirse para ingresar, y también el sistema de promoción interno.
 - Para asumir cargos de jefatura, se establece el sistema de concurso público.
 - Se deberá velar por alcanzar una proporción máxima de un 30% de empleos a contrata y de un 70% de planta en la dotación de la Dirección del Trabajo.

2. Incorporación de nuevas asignaciones:

- Asignación de turno: se establece un sistema de turnos para horarios no habituales (horario nocturno, feriados y fines de semana) fijados por el Director del Trabajo.
- Asignación de responsabilidad: aplicable a funcionarios que ejerzan funciones directivas de jefatura de departamento o niveles de jefaturas y en tanto desempeñen efectivamente dichas funciones.
- Asignación especial de calidad de servicio: se reemplaza la actual asignación de estímulo y desempeño. Tendrá derecho a percibir dicha asignación el personal de planta y a contrata, siempre que haya prestado servicios sin solución de continuidad durante, a lo menos, 6 meses del año objeto de evaluación.

Comentario

El proyecto original ingresado a la Cámara de Diputados buscaba realizar una real modernización de la Dirección del Trabajo. Luego, con el avance de la discusión, el enfoque de la modernización se fue diluyendo, dando paso a una regulación respecto del personal de la Dirección del Trabajo. Al final, el proyecto que tenemos al frente, más que realizar una real modernización, resuelve inquietudes de los funcionarios de la Dirección.

Nos hubiera gustado que se mantuvieran elementos que fueron quedando atrás, como las garantías procesales en el proceso de fiscalización y los deberes de las partes durante este proceso. Se eliminó, además, la facultad del Director de nombrar, promover o remover personal con independencia de otras autoridades.

Si bien el proyecto no cumple con una real modernización de la Dirección del Trabajo, si logra un avance en dicha dirección incluyendo ciertas materias a favor de los funcionarios de la Dirección. Por lo anterior, se sugiere votar a favor de la iniciativa.

**Proyecto de ley sobre regulación de ensayos clínicos de productos
farmacéuticos.**
Boletín 13829-11

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Francisco Chahuán, Guido Girardi, Carolina Goic, Rabindranath y Ena von Baer.

Sugerencia de votación: A favor

Objetivo del Proyecto

El proyecto de ley tiene por finalidad superar las condiciones de incerteza jurídica y equilibrar la protección de los intereses de los sujetos que participan en los ensayos con acceso a los beneficios que la ciencia otorga, resolver temas en materia de continuidad de tratamiento y de responsabilidad civil por los daños, en el caso de ensayos clínicos.

Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 7 de octubre del 2020. La iniciativa fue discutida en general por la comisión de Salud y aprobado unánimemente con el voto favorable de los siguientes Senadores:

1. Carolina Goic
2. Ena Von Baer
3. Francisco Chahuán
4. Rabindranath Quinteros

Contenido

El proyecto consta de tres artículos permanentes que introducen modificaciones al Código Sanitario, a la Ley 20.850 que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo (Ley Ricarte Soto) y la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su salud.

El proyecto de ley, en resumen, plantea los siguientes puntos:

1. Tratamiento Médico Continuo

La persona que participa en el ensayo clínico tendrá derecho a que se le otorgue sin costo, la continuidad

del tratamiento investigado, por el tiempo persista la **utilidad terapéutica**. La utilidad terapéutica y eficacia del tratamiento serán determinadas de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

2. Responsabilidad de Daños

Se formula un régimen especial de responsabilidad por daños ocasionados en ensayos clínicos.

- Se establece que el daño acreditado se presumirá que es producido como consecuencia de la investigación, las clínicas deberán probar lo contrario (admite prueba en contrario).
- La acción para perseguir la responsabilidad prescribirá en 10 años contando desde el término del ensayo clínico. De esta forma se otorga certeza jurídica al establecer un plazo máximo, lo que facilita la realización de ensayos clínicos.
- Se excluye de este régimen de responsabilidad todos los daños y perjuicios que sean inherentes a la patología objeto de estudio o aquellos que sean propios de la evolución de la enfermedad.

3. Participación de Discapacitados

- Se otorga el derecho a toda persona con discapacidad psíquica o intelectual a participar en una investigación, manifestando su consentimiento previo, expreso, libre e informado.
- Se permite utilizar declaraciones de voluntad anticipadas y otras herramientas para hacer primar la verdadera voluntad de las personas que pueden verse afectadas por su enfermedad en el futuro, limitando su voluntad y discernimiento.
- Se permite designar a uno o más acompañantes para la toma de decisiones, quienes podrán asistirlo, cuando sea necesario para analizar los riesgos y beneficios que pueden otorgar la investigación científica.

Comentarios

Este proyecto iniciado en moción, surge como reacción a un informe realizado por un grupo de científicos de 14 universidades y asociaciones médicas de Chile, hecha con la intención de que se facilite la investigación clínica en nuestro país.

Al estudiar nuestra legislación en torno a la fiscalización de los ensayos clínicos y los derechos y deberes del paciente, podemos ver que tenemos unos de los sistemas regulatorios más estrictos en comparación a la legislación internacional. Desde la entrada en vigencia hace 7 años de la ley 20584, que reguló esta materia, se ha producido un daño a la investigación en nuestro país por las altas exigencias y prohibiciones que existen.

Un ejemplo de lo anterior es la prohibición absoluta de investigar en personas con discapacidad psíquica e intelectual, lo que produjo que varios proyectos de investigación fueran rechazados, a pesar de ir en directo beneficio de estas personas discapacitadas. De esta forma, se provocó una reducción de estudios en enfermedades como la depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, autismo entre otros. A pesar de ser un país con altas tasas de depresión, desde el año 2015 hasta la fecha no existen estudios en depresión aprobados.

El proyecto de ley realiza tres grandes cambios:

1. Se mejora el régimen de responsabilidad por daños ocasionado en ensayos clínicos, otorgando mayor seguridad jurídica respecto del plazo de prescripción de la acción que solicita reparación de daños. La incerteza causada por la falta de plazo de prescripción, significó la reparación de daños que no decían relación con los ensayos clínicos a lo largo de la vida del paciente.
2. Se otorga mayor seguridad jurídica a los participantes de ensayos clínicos sobre el derecho a recibir tratamiento después del ensayo. Si el tratamiento es beneficioso para el paciente, éste tendrá derecho a recibir tratamiento de forma gratuita, un beneficio que incentiva que participen de los ensayos.
3. Se permite la realización de ensayos clínicos en personas discapacitadas, evitando que se les discrimine arbitrariamente al evitar que puedan ser beneficiarios de los ensayos clínicos.

En definitiva, se armoniza y logra un equilibrio entre los derechos de los pacientes y la fiscalización que se realiza a los ensayos clínicos, evitando desincentivar estudios que sólo van en beneficio de nuestra población.

Por lo anterior, se sugiere votar a favor de la iniciativa.

Proyecto de ley que establece garantías básicas a las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales.

Boletín 13496-13

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general y particular
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Carolina Goic, Juan Pablo Letelier, Manuel José Ossandón y David Sandoval

Sugerencia de votación: A favor.

Objetivo del Proyecto

Este proyecto de ley tiene por finalidad lo siguiente:

1. Regular las relaciones entre los trabajadores de plataformas digitales y las empresas de plataformas digitales de servicios, mediante contratos especiales incorporados en un nuevo capítulo en el Título II del Libro Primero del Código del Trabajo.
2. Establecer y regular los contratos de trabajo de los trabajadores de plataformas dependientes y los contratos de prestación de servicios de los trabajadores de plataformas independientes. Respecto de estos últimos se consagra su derecho a la cobertura de seguridad social y el respeto de sus derechos fundamentales.
3. Se consagra el derecho de los trabajadores de plataformas dependientes e independientes a constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes.

Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 13 de mayo de 2020 y fue discutido en general y en particular por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de las integrantes presentes: Senadora Goic y Senadores Galilea y Letelier. Se aprobó en particular con el voto de los senadores Goic, Letelier, Prohens y **Van Rysselberghe**.

Contenido

El proyecto consta de un sólo artículo permanente y de un artículo transitorio que modifican el Código del Trabajo.

- Se define **empresas de plataforma digital de servicios** como: *“Aquella organización que, a título oneroso, administra o gestiona un sistema informático o de tecnología ejecutable en aplicaciones de dispositivos*

móviles o fijos que permite que un trabajador de plataformas digitales ejecute servicios, para los usuarios de dicho sistema informático o tecnológico, en un territorio geográfico específico, tales como el retiro, distribución y/o reparto de bienes o mercaderías, el transporte menor de pasajeros, u otros”.

- Se define al **trabajador de plataformas digitales** como: *“Aquel que ejecuta servicios personales, sea a cuenta propia o ajena, solicitados por usuarios de una aplicación administrada o gestionada por una empresa de plataforma digital de servicios.”*
- Se regula los contratos de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales dependientes y su contenido. Este contrato deberá indicar:
 - La determinación de la naturaleza de los servicios y los términos y condiciones bajo los cuales deben prestarse.
 - El método de cálculo para la determinación de la remuneración, forma y período de pago.
 - La designación de un canal oficial donde el trabajador pueda presentar sus objeciones, reclamos o requerimientos respecto de los pagos recibidos, el registro de sus labores, la asignación de las mismas y la evaluación que los clientes realizan acerca de su labor.
 - La determinación de la zona geográfica en que debe prestar servicios el trabajador.
 - Los criterios utilizados para establecer el contacto y coordinación entre el trabajador y los usuarios de la plataforma.
- Se regula los contratos de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales independientes. Este contrato deberá consignar:
 - La individualización de las partes.
 - Los términos y condiciones para determinar el precio o tarifa de los servicios del trabajador de plataformas digitales independiente.
 - Los criterios utilizados para establecer el contacto y coordinación entre el trabajador y los usuarios.
 - La determinación de la zona geográfica en que debe prestar servicios el trabajador independiente, o bien la forma en que dicha zona se determinará.
 - Las reglas de protección de datos personales del trabajador de plataformas digitales independiente a que tiene acceso la empresa de plataforma digital.
 - Los tiempos máximos de conexión continua y la obligación de desconexión por parte de la empresa de plataforma digital de servicios.
 - La designación de un canal oficial donde el trabajador independiente pueda presentar sus objeciones, reclamos o requerimientos.
 - Las causales de terminación del contrato.
- Se regula normas de seguridad social, remuneración, horas máximas de conexión a la plataforma, entre otros, para la protección del trabajador independiente y dependiente.
 - Se deberá proteger los datos personales de los trabajadores
 - Se deberá realizar una capacitación y otorgar elementos de protección.
 - Serán beneficiados de un seguro de daños.

- Se les reconoce el derecho a la sindicalización.

Comentarios

El proyecto de ley va dirigido a proteger a los trabajadores de plataformas digitales, mediante la regulación de los contratos, tanto de los trabajadores dependientes como independientes. Se consagra una serie de requisitos mínimos que deberán cumplir dichos contratos, así como una serie de garantías mínimas que deberán cumplir las plataformas digitales para la protección del trabajador.

El proyecto surge como reacción ante la creciente irrupción de trabajadores de plataformas digitales, tanto para el transporte de pasajeros como Uber, Didi entre otros, como el de aplicaciones para la entrega de alimentos a domicilio como Rappi y Pedidos Ya. Nuestra legislación requiere de ser adecuada y actualizada para tomar en consideración esta nueva realidad creciente, y que con el avance del Covid-19, sólo seguirán en aumento.

Por lo anterior, se sugiere votar a favor de la iniciativa.

Proyecto de ley que busca implementar adecuaciones en el proceso de descentralización del país.

Boletín 13823-06

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Simple
Discusión	En general
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Mensaje
Autores	Ejecutivo

Sugerencia de votación: A favor

Objetivo del Proyecto

El proyecto tiene por finalidad:

1. Definir el concepto de competencia
2. Establecer un procedimiento de seguimiento y evaluación de las competencias transferidas.
3. Establecer la revocación de competencias por ley.
4. Crear un procedimiento que resuelva las cuestiones de competencia que puedan surgir de la aplicación de la nueva normativa que rige la actuación de los gobiernos regionales.
5. Incluir normas para evitar la duplicidad de funciones y propender a la unidad de acción, una vez transferidas las competencias.
6. Regular el silencio administrativo.
7. Establecer al gobernador regional como superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales.
8. Precisar el rol de la unidad de control del gobierno regional.

Antecedentes

El proyecto de ley ingresó al Senado el 6 de octubre del 2020, y fue aprobado en general, unánimemente¹, por la Comisión de Gobierno el día 26 de octubre del mismo año.

Contenido

El proyecto de ley consta de dos artículos permanentes y un artículo transitorio:

Artículo 1º: Modifica la ley N°19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional:

¹ Incluido el voto de la Senadora Luz Ebensperger.

- Se define **competencia** como la facultad que poseen los órganos de la Administración del Estado para satisfacer las necesidades públicas que sus respectivas leyes orgánicas han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.
- En relación a la **comisión de servicios**, se permite al jefe superior del ministerio o servicio designar a un funcionario para ejercitar la competencia transferida. El servicio o ministerio no podrá contratar empleos a contrata para desempeñar labores de similar naturaleza a las contenidas en las competencias transferidas, para así, evitar la duplicidad de funciones.
- Se regula el **silencio administrativo**: una vez cumplido el plazo para transferir la competencia de una entidad a otra (6 meses), si aún existe una contienda de competencia pendiente, la falta de pronunciamiento de la autoridad será considerada como silencio administrativo negativo. Es decir, ante el silencio, se entenderá que se rechaza la transferencia de competencias solicitada.
- Se contempla una **evaluación del ejercicio de las competencias** que fueron transferidas de forma definitiva. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en conjunto con la Dirección de Presupuestos y el ministerio o servicio público al cual le correspondía originalmente el ejercicio de la competencia transferida, realizarán una evaluación del ejercicio de la competencia transferida.
- Se establece que una vez transferida de forma definitiva la competencia, esta sólo podrá ser **revocada mediante una ley**.
- Se indica que el gobernador regional es el **superior jerárquico** de los directores de los servicios públicos regionales.
- Se modifican normas de la unidad de control del gobierno regional.

Artículo 2º: Incorpora tres artículos nuevos a la ley N°10.336, de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República:

- Se afirma que el Contralor General **resolverá las contiendas de competencia** que surjan entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.
- Se regula el **proceso** mediante el cual se solicita a la Contraloría que resuelva sobre una contienda de competencia.

Comentarios

El proyecto de ley busca regular materias que quedaron sin resolverse en las leyes N° 21.073 y N° 21.074, que regulan las elecciones de gobernadores regionales y fortalecen la regionalización del país respectivamente. Durante el transcurso del tiempo, se pudo evidenciar la necesidad de regular ciertas materias que no quedaban bien reguladas en dichas leyes.

En junio del año 2019 se conformó una mesa técnica de descentralización la cual hizo entrega de un informe, dando a conocer su sugerencia para perfeccionar la legislación actual. Dentro de dichas sugerencias, se sugirió establecer una definición, evaluación y revocación de competencias como la regulación del silencio administrativo. El proyecto de ley acoge dichas sugerencias y lo plasma en la iniciativa leg.

Las elecciones de gobernadores son una oportunidad importante para avanzar en la descentralización del país, pero este proceso debe ser realizado de forma efectiva y con transferencia de competencias armónica desde las distintas entidades hacia el gobernador.

Se sugiere votar a favor del proyecto de ley.

Proyecto de ley que facilita el pago por subrogación de las deudas alimentarias proveniente de las retenciones de retiros previsionales que autorizan la Constitución y las leyes.

Boletín 13942-07

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En particular
Sugerencia votación	En contra
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz, Ximena Rincón, Marcela Sabat.

Sugerencia de votación: En contra

Objetivo del Proyecto

El proyecto de ley tiene por finalidad disponer la subrogación legal del alimentario acreedor en los derechos del afiliado deudor que no solicitó voluntariamente el retiro de fondos previsionales que permiten la Constitución y las leyes, hasta por la totalidad de la deuda.

Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 9 de diciembre de 2020, siendo aprobado en general y particular por la comisión de Infancia el 15 de diciembre.

En votación en general el proyecto de ley, votaron a favor los Honorables Senadores señoras Rincón (Presidenta), Allende y Sabat, y el Honorable Senador señor Quintana.

El 22 de enero la comisión de Infancia aprobó en particular el proyecto, sin modificar el contenido del proyecto. Las indicaciones de la oposición fueron retiradas, y las indicaciones de la Senadora Von Baer del Senador Castro fueron rechazadas.

Contenido

El proyecto consta de un artículo único permanente, compuesto por dos numerales. El primer numeral introduce un nuevo artículo transitorio a la Ley de Tribunales de Familia, y el segundo numeral modifica disposiciones de la ley 21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones.

Numeral 1º Introduce un nuevo artículo 17 transitorio a la ley de tribunales de familia.

- Se establece que para efectos del retiro del primer 10% (en caso de aún no solicitarse) y del segundo retiro del 10%, el alimentario (acreedor) a quien se le debe alimentos, se entenderá subrogado por el sólo ministerio de la ley, en los derechos del alimentante deudor que no haya solicitado voluntariamente el retiro de los fondos previsionales.
- En caso de existir más de un alimentario, la subrogación que opera a favor de uno de ellos, beneficiará a los demás. De esta forma todos los alimentarios se verán subrogados en los derechos del alimentante deudor y podrán acceder al retiro de las pensiones para el pago de la deuda alimenticia. En este caso, el monto retenido se dividirá en partes iguales según el número de alimentarios que cuenten con una medida cautelar vigente dictada a su favor. Si lo adeudado a uno de los alimentarios es menor a la cuota, el remanente (diferencia entre lo que le corresponde y la cuota) acrecerá la cuota de los demás.
- Si las deudas alimentarias fueren inferiores al monto de los retiros disponibles de la pensión, en lo restante, el afiliado mantendrá sus derechos y podrá solicitar su retiro o no según le parezca.

Numeral 2° realiza adecuaciones a la ley del segundo retiro del 10%.

- Elimina el artículo 4° y 6° que hacen alusión al actual sistema de subrogación.
- Hace correcciones de referencia.

Comentarios

Hoy ya existe un sistema de subrogación para solicitar el retiro del 10% para efectos del pago de pensiones alimenticias.

Sistema de subrogación contemplada en la ley 21.295

- El alimentario (acreedor) puede solicitar al juez de familia competente que se le autorice a subrogarse en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales, tanto del primer 10% como del segundo.
- Si existen varios alimentarios en distintas causas y los fondos previsionales no alcanzan para pagarlas todas, el tribunal que conoció de la causa más antigua, deberá prorratar, para definir el monto de cada deuda alimentaria que se pagará con el fondo retirado del afiliado alimentante.

Este sistema permite que se respeten principios básicos del debido proceso, como la bilateralidad que le otorga a todas las partes involucradas el derecho a contestar, replicar u oponerse. En este caso, es el Juez con los antecedentes en mano, quien decide si procede o no la subrogación y quien además determina el monto que deberá pagarse a todos los alimentarios de existir más de uno. Además, el afiliado que es deudor de pensiones alimenticias podrá oponerse a la subrogación, lo que será analizado por el Juez del tribunal competente.

Lo que sugiere realizar este proyecto de ley es establecer la subrogación, por parte del acreedor de la deuda alimenticia, en los derechos del alimentante moroso, por el solo ministerio de la ley. No existe análisis ni estudio de los hechos por parte del juez. No existe tampoco un debido proceso, donde todas

las partes pueden conocer de los actos del tribunal y oponerse. Aquí se saltan todo el sistema judicial para otorgar a todos los acreedores de derechos alimenticios el derecho a solicitar el retiro del 10% en nombre del deudor.

Recordemos que los fondos previsionales son considerados propiedad privada y de dominio de los afiliados, por lo que la subrogación debiera ser considerada y analizada por un juez antes de llevarse a cabo. La derecha históricamente ha defendido que las pensiones son de propiedad de cada afiliado, por lo que subrogarlo y solicitar el retiro del 10% en contra de su voluntad, ya podría ser considerado como problemático. Sin embargo, el proyecto del segundo retiro lo reguló y se encuentra vigente. Lo que hay que resguardar ahora, es el debido proceso, y el derecho del afiliado a oponerse a la subrogación. De lo contrario, si el afiliado moroso de alimentos quisiera pagar la deuda alimenticia sin realizar el retiro de sus pensiones, no podría hacerlo, ya que se subrogará por el solo ministerio de la ley, y el alimentario podrá solicitar el retiro de las pensiones para el pago.

Por lo anterior, sugiero votar en contra del proyecto de ley.

Proyecto de ley que facilita el pago por subrogación de las deudas alimentarias proveniente de las retenciones de retiros previsionales que autorizan la Constitución y las leyes.

Boletín 13942-07

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general y particular
Sugerencia votación	En contra
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz, Ximena Rincón, Marcela Sabat.

Sugerencia de votación: En contra

Objetivo del Proyecto

El proyecto de ley tiene por finalidad disponer la subrogación legal del alimentario acreedor en los derechos del afiliado deudor que no solicitó voluntariamente el retiro de fondos previsionales que permiten la Constitución y las leyes, hasta por la totalidad de la deuda.

Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 9 de diciembre de 2020, siendo aprobado en general y particular por la comisión de Infancia el 15 de diciembre.

En votación en general el proyecto de ley, votaron a favor los Honorables Senadores señoras Rincón (Presidenta), Allende y Sabat, y el Honorable Senador señor Quintana. En particular, el proyecto fue aprobado con el voto favorable de los Honorables Senadores señoras Ximena Rincón González (Presidenta) y Isabel Allende Bussi (Reemplazada por Carlos Montes Cisternas), y señor Jaime Quintana Leal.

Contenido

El proyecto consta de un artículo único permanente, compuesto por dos numerales. El primer numeral introduce un nuevo artículo transitorio a la Ley de Tribunales de Familia, y el segundo numeral modifica disposiciones de la ley 21.295, que establece un segundo retiro de fondos de pensiones.

Numeral 1º Introduce un nuevo artículo 17 transitorio a la ley de tribunales de familia.

- Se establece que para efectos del retiro del primer 10% (en caso de aún no solicitarse) y del segundo retiro del 10%, el alimentario (acreedor) a quien se le debe alimentos, se entenderá subrogado por

el sólo ministerio de la ley, en los derechos del alimentante deudor que no haya solicitado voluntariamente el retiro de los fondos previsionales.

- En caso de existir más de un alimentario, la subrogación que opera a favor de uno de ellos, beneficiará a los demás. De esta forma todos los alimentarios se verán subrogados en los derechos del alimentante deudor y podrán acceder al retiro de las pensiones para el pago de la deuda alimenticia. En este caso, el monto retenido se dividirá en partes iguales según el número de alimentarios que cuenten con una medida cautelar vigente dictada a su favor. Si lo adeudado a uno de los alimentarios es menor a la cuota, el remanente (diferencia entre lo que le corresponde y la cuota) acrecerá la cuota de los demás.
- Si las deudas alimentarias fueren inferiores al monto de los retiros disponibles de la pensión, en lo restante, el afiliado mantendrá sus derechos y podrá solicitar su retiro o no según le parezca.

Numeral 2° realiza adecuaciones a la ley del segundo retiro del 10%.

- Elimina el artículo 4° y 6° que hacen alusión al actual sistema de subrogación.
- Hace correcciones de referencia.

Comentarios

Hoy ya existe un sistema de subrogación para solicitar el retiro del 10% para efectos del pago de pensiones alimenticias.

Sistema de subrogación contemplada en la ley 21.295

- El alimentario (acreedor) puede solicitar al juez de familia competente que se le autorice a subrogarse en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales, tanto del primer 10% como del segundo.
- Si existen varios alimentarios en distintas causas y los fondos previsionales no alcanzan para pagarlas todas, el tribunal que conoció de la causa más antigua, deberá prorratear, para definir el monto de cada deuda alimentaria que se pagará con el fondo retirado del afiliado alimentante.

Este sistema permite que se respeten principios básicos del debido proceso, como la bilateralidad que le otorga a todas las partes involucradas el derecho a contestar, replicar u oponerse. En este caso, es el Juez con los antecedentes en mano, quien decide si procede o no la subrogación y quien además determina el monto que deberá pagarse a todos los alimentarios de existir más de uno. Además, el afiliado que es deudor de pensiones alimenticias podrá oponerse a la subrogación, lo que será analizado por el Juez del tribunal competente.

Lo que sugiere realizar este proyecto de ley es establecer la subrogación, por parte del acreedor de la deuda alimenticia, en los derechos del alimentante moroso, por el solo ministerio de la ley. No existe análisis ni estudio de los hechos por parte del juez. No existe tampoco un debido proceso, donde todas las partes pueden conocer de los actos del tribunal y oponerse. Aquí se saltan todo el sistema judicial para otorgar a todos los acreedores de derechos alimenticios el derecho a solicitar el retiro del 10%

en nombre del deudor.

Recordemos que los fondos previsionales son considerados propiedad privada y de dominio de los afiliados, por lo que la subrogación debiera ser considerada y analizada por un juez antes de llevarse a cabo. La derecha históricamente ha defendido que las pensiones son de propiedad de cada afiliado, por lo que subrogarlo y solicitar el retiro del 10% en contra de su voluntad, ya podría ser considerado como problemático. Sin embargo, el proyecto del segundo retiro lo reguló y se encuentra vigente. Lo que hay que resguardar ahora, es el debido proceso, y el derecho del afiliado a oponerse a la subrogación. De lo contrario, si el afiliado moroso de alimentos quisiera pagar la deuda alimenticia sin realizar el retiro de sus pensiones, no podría hacerlo, ya que se subrogará por el solo ministerio de la ley, y el alimentario podrá solicitar el retiro de las pensiones para el pago.

Por lo anterior, sugiero votar en contra del proyecto de ley.

Proyecto de ley que establece una excusa a las mujeres embarazadas durante todo el período de gestación y a aquellas con hijos o hijas menores de dos años de las labores de vocal de mesa.

Boletín 13955-07

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general y particular
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Carlos Bianchi, Luz Ebensperger, José Miguel Insulza, Manuel José Ossandón y Marcela Sabat.

Sugerencia de votación: A favor.

Objetivo del Proyecto

Este proyecto de ley buscar posibilitar a la mujer designada vocal de mesa, durante todo el período de gestación o a la madre de hijos o hijas menores de dos años, y a quienes estén al cuidado de personas, al día de funcionamiento de las mesas receptoras, de excusarse de desempeñar el cargo, acreditando tales condiciones con los certificados y antecedentes correspondientes.

Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 15 de diciembre del 2020 y fue discutido en general y en particular por la Comisión Mujer. La comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de las integrantes presentes: Senadora Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Se aprobó en particular con el voto de las senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y **Von Baer**.

Contenido

El proyecto consta de un solo artículo que modifica el artículo 49 del DFL Nº 2 de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.

La iniciativa legal crea una causal para excusarse de ser vocal de mesa para una elección para:

1. La mujer en estado de embarazo, durante todo el periodo de gestación, acreditado mediante documento extendido por el establecimiento de salud donde se realice el control del mismo o un certificado médico, o bien ser madre de un hijo o hija menor de dos años al día en que funcionen las mesas receptoras, acreditado con el correspondiente certificado de nacimiento de el o la menor. En caso de que la madre no tenga el cuidado personal, quien lo tuviere podrá excusarse acreditándolo debidamente.

2. Para el cuidador de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad en los mismos días en que funcionen las mesas receptoras, lo que deberá ser acreditado a través de una declaración jurada notarial.

Comentarios

El proyecto busca proteger a la madre y al niño menor de 2 años que se encuentra en un periodo de lactancia, estableciendo una causal que le permite excusarse de la responsabilidad de ser vocal de mesa. En el caso que el cuidado personal no lo tenga la madre, se permite excusarse al que tenga el cuidado personal del niño, incluyendo al padre.

Además, se consagra el mismo derecho de excusarse para el cuidador de un adulto mayor o de una persona con discapacidad.

Lo anterior es de toda lógica ya que tanto el menor de 2 años como los adultos mayores y discapacitados en situación de dependencia requieren de la presencia de otra persona de forma urgente, por lo que acudir el día de las elecciones para ser vocal de mesa, no parece razonable. El proyecto es positivo ya que recoge y se hace cargo de una realidad que viven muchos chilenos a lo largo del país.

Se sugiere aprobar el proyecto de ley.

Proyecto de ley que modifica el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE), con el objeto de potenciar la reactivación y recuperación de la economía.

Boletín 13970-05

Tramitación	Segundo trámite constitucional
Urgencia	Discusión inmediata
Discusión	En general y particular
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Mensaje
Autores	Ejecutivo

Sugerencia de votación: A favor

Objetivo del Proyecto

Según el Ministerio de Hacienda, el proyecto tiene por finalidad ampliar los beneficios y usos del FOGAPE y ayudar a que las empresas puedan sortear la pandemia y reactivarse a través de créditos con garantía estatal, los cuales ahora podrán usarse para inversión y pago de deudas vigentes, además de capital de trabajo.

Antecedentes

El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de diciembre del 2020. Fue aprobado en general con 113 votos a favor, 9 votos en contra y 16 abstenciones, y aprobado en particular el 24 de diciembre del 2020.

En su segundo trámite constitucional en el Senado, el proyecto fue aprobado hoy por la Comisión de Hacienda.

Contenido

El proyecto de ley introduce las siguientes principales modificaciones al FOGAPE:

1. Con el acuerdo de las partes, se podrá ampliar hasta en un máximo de 5 años la vigencia del financiamiento y de la garantía de los créditos FOGAPE- COVID. El plazo actualmente es de 4 años.
2. El nuevo crédito FOGAPE-REACTIVA, podrá ser utilizado para pagar o reestructurar los actuales créditos con garantía FOGAPE.

3. Se permite que los créditos que se otorguen bajo el nuevo FOGAPE-REACTIVA, puedan ser otorgados hasta el 31 de diciembre del año 2021, para aquellas empresas con ventas netas anuales que no excedan los 1.000.000 de UF (29,064,700,000 de pesos). Hoy el plazo para el crédito FOGAPE-COVID es el 30 de abril del 2021.
4. Se mantiene la tasa máxima de 3% + Tasa de Política Monetaria (actualmente en 0,5%) para el programa FOGAPE-COVID, pero se flexibiliza la tasa para el otorgamiento de otros programas FOGAPE. En la práctica esto va a permitir que empresas consideradas “más riesgosas” puedan obtener financiamiento garantizados por el FOGAPE, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas. La Comisión de Hacienda aprobó que la tasa del nuevo FOGAPE tenga una tasa de interés nominal anual que no sea mayor a la tasa de política monetaria más el equivalente anual de una tasa de 0,6% mensual.
5. Los límites del FOGAPE-REACTIVA serán los siguientes:

Empresas con ventas netas de IVA anuales hasta:	Límite máximo de financiamiento
25.000 UF	6.250 UF
100.000 UF	25.000 UF
600.000 UF	150.000 UF
1.000.000 UF	250.000 UF

6. El FOGAPE-REACTIVA aumenta los límites de las garantías FOGAPE para los sectores económicos más afectadas por la pandemia, como el turismo, la hotelería y la gastronomía. Además, se aumenta los límites cuando se utilizó el crédito para la adquisición de activos fijos.
 - a. Tratándose de los sectores económicos más vulnerados, se podrá aumentar hasta el doble.
 - b. Tratándose de quienes utilicen los créditos para la adquisición de activos fijos, se podrá aumentar hasta en 1,5 veces.
7. La garantía máxima para el programa FOGAPE-REACTIVA es de 7 años desde el otorgamiento del crédito, extendiendo el programa hasta el año 2028.

Comentarios

El FOGAPE REACTIVA a diferencia del primer FOGAPE, va a permitir que muchas más Pymes puedan postular y obtener un crédito. La baja tasa de interés del primer FOGAPE, dificultaba en demasía que los bancos dieran préstamos a clientes considerados “más riesgosos”. Los negocios más chicos, como los almacenes de barrios, son considerados más riesgosos en comparación a las grandes empresas, por no tener altas utilidades y liquidez. Sin embargo, son justamente estas empresas, las más pequeñas, las más afectadas por el COVID-19, ya que se permite que las grandes cadenas de supermercados funcionen, obligando a muchos de los pequeños a cerrar por no otorgar un servicio considerado de primera necesidad. El FOGAPE REACTIVA considera una flexibilización de la tasa, permitiendo que la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a créditos para obtener liquidez, evitando el cierre definitivo de sus negocios.

El proyecto en discusión en una primera instancia iba a reemplazar el primer FOGAPE COVID, sin embargo, el Ejecutivo consideró que existen varias empresas que puede seguir viéndose beneficiados por el primer FOGAPE, por lo que se decidió mantenerla y agregar el FOGAPE-REACTIVA.

El Banco Central ha destacado el importante rol que ha jugado el primer FOGAPE para otorgar liquidez a las Pymes y permitirles seguir funcionando. Según datos entregados por la CMF, al 18 de diciembre de 2020, se registró un total de 412.812 solicitudes, de las cuales se han cursado 268.697, mientras que se han rechazado 72.938. Con el nuevo FOGAPE, se espera beneficiar a un mayor universo de Pymes, disminuyendo los rechazados.

Por lo anterior, se sugiere votar a favor de la iniciativa.

Proyectos de Acuerdo

1. Proyecto de acuerdo por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, mandate a las autoridades competentes para codificar las prestaciones de salud de los terapeutas ocupacionales, psicopedagogos y de otras áreas destinadas a terapias multidisciplinarias de recuperación, tratamiento y rehabilitación de la salud.

Autores:

1. Coloma
2. Ebensperger
3. Goic
4. Van Rysselberghe
5. von Baer
6. Bianchi
7. Castro
8. Chahuán
9. Durana
10. Galilea
11. García
12. García Huidobro
13. Girardi
14. Guillier
15. Insulza
16. Lagos
17. Moreira
18. Pérez
19. Prohens
20. Pugh
21. Quinteros
22. Sandoval

Objetivo:

Codificar las prestaciones de salud de los terapeutas ocupacionales, psicopedagogos.

Antecedentes:

- i. Dado el avance en ciencias y medicina es que se han ido incorporando nuevos profesionales al área de la salud.
- ii. Los terapeutas ocupacionales y de psicopedagogos. Ambos corresponden a profesionales cuya formación y ejercicio profesional que prestan apoyo importante para enfrentar algunas enfermedades y condiciones.
- iii. En cuanto a los terapeutas ocupacionales, se puede usar de referencia la definición profesional que plantea la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales "*una profesión socio-sanitaria que a través de la valoración de las capacidades y problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales del individuo pretende, con un adecuado tratamiento, capacitarle para alcanzar el mayor grado de independencia posible en su vida diaria, contribuyendo a la recuperación de su enfermedad y/o facilitando la adaptación a su discapacidad*".
- iv. El rol de los psicopedagogos hoy es ampliamente reconocido en el aporte que significan para el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades cognitivas, especialmente en niños con necesidades educativas especiales.

- v. Dado lo expuesto anteriormente y considerando que muchas familias en Chile necesitan recurrir a tratamiento o terapia multidisciplinaria para alguno de sus integrantes. Es imperante contar con estas prestaciones codificada para el oportuno apoyo de psicopedagogos y Terapeutas ocupacionales.
- vi. De existir diagnostico claro por el médico tratante y un tratamiento indicado, es importante que se dispongan de las alternativas para que las coberturas de los seguros de salud incorporen las prestaciones de estos profesionales, y de los que sean relevantes para el tratamiento y terapias multidisciplinarias que apuntan al interés superior de los pacientes.
- vii. Es menester mencionar que el tratamiento oportuno y la compañía de una terapia multidisciplinaria podría significar una disminución frente al tiempo total de rehabilitación.
- viii. Todo lo anteriormente señalado va en favor de todas las personas que padezcan alguna enfermedad o condición que requiera tratamiento y terapia multidisciplinaria especialmente a aquellos que no cuentan con los recursos para cubrir la totalidad del servicio en forma particular. Además de que la medida favorece el desarrollo y ejercicio profesional de Terapeutas Ocupacionales y Psicopedagogos, traduciéndolo en un importante aporte a la sociedad.

Sugerencia de votación:

A Favor. Es un tremendo aporte para las familias chilenas que se codifiquen estas prestaciones reconociéndolas ya que hace más factible económicamente acceder a terapias.

- 2. Proyecto de Acuerdo por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República, que, si lo tiene a bien, se sirva instruir a los Ministerios que indica la implementación de una serie de medidas de apoyo al sector gastronómico de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Autores:

- 1. Quintana
- 2. Aravena
- 3. Goic
- 4. Muñoz
- 5. Órdenes
- 6. Rincón
- 7. Sabat
- 8. Araya
- 9. Chahuán
- 10. De Urresti
- 11. Elizalde
- 12. García
- 13. Girardi
- 14. Harboe
- 15. Huenchumilla
- 16. Insulza
- 17. Kast
- 18. Lagos
- 19. Montes
- 20. Moreira
- 21. Quinteros

22. Soria

Antecedentes:

- i. Dada la emergencia sanitaria, y la crisis económica que atraviesa nuestro país.
- ii. El rubro de la gastronomía ha sufrido las mayores consecuencias, ya que dadas las medidas para enfrentar la pandemia han significado para muchos operar bajo el punto de equilibrio, o hasta tener que cerrar sus negocios.
- iii. Como los ingresos se han visto notablemente disminuidos, desde la crisis social vivida desde octubre del 2019. Es que una serie de trabajadores del área, han perdido sus puestos de trabajo.
- iv. Las extensiones de las cuarentenas en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y las exigencias de los aforos permitidos, el tener que contar con terrazas para la atención a clientes considerando el clima, es que se ha hecho aún más difícil para estas regiones.
- v. En otras regiones se han implementado iniciativas en donde se permite cerrar calles para que la capacidad máxima de los restaurantes se aumente. Sin embargo, es una medida que en la realidad es muy difícil de replicar en las regiones mencionadas.
- vi. Dado lo anterior es que el proyecto de acuerdo solicita a S.E el Presidente de la República, a través del ministerio de Hacienda; Salud; Economía, Fomento y turismo, Trabajo y previsión Social, y Desarrollo Social y Familia:
 - a. Revisar los protocolos de apertura de restaurantes, bares y otros afines, con el propósito de promover la actividad económica, permitiendo el funcionamiento, en fase 2 del plan “Paso a Paso”, con un 25% de capacidad.
 - b. El establecimiento de un subsidio específico al sector gastronómico, que permita a los locatarios adaptar físicamente los establecimientos, a fin de lograr una atención segura a las personas.
 - c. Suspender el DICOM laboral, ya que más del 50% del gremio no puede acceder actualmente a beneficios estatales debido a problemas con éste.
 - d. Autorizar un subsidio al empleo para las empresas que se encuentran con DICOM financiero o laboral. Permitir que SERCOTEC, CORFO y otros subsidios del Estado, no excluyan a las empresas que se encuentren en DICOM.
 - e. En relación a los créditos COVID, corrección monetaria e interés simple, de forma que las deudas existentes no aumenten cuando las condiciones materiales obliguen a mantener cerrados los locales. Del mismo modo, se precisa que se pospongan los intereses por un lapso de tiempo para que, al retomar los pagos, sean bajo los valores normales y no aumentados.
 - f. Que el Ministerio del Trabajo indique a PREVIRED la creación de un nuevo link en su página web de pago, con el objetivo de poder cancelar imposiciones declaradas y atrasadas, correspondientes al período que media entre enero de 2020 y diciembre de 2020, las cuales deberán considerar un interés simple, con el objeto de dejar al día las leyes sociales y no afectar a las y los trabajadores.
 - g. Que el Ministerio del Trabajo instruya a las AFPs para que efectúen la supresión de los cobros de las oficinas de cobranzas, debido a que el monto de las deudas aumenta en intereses, gastos de cobranza y multas hasta en 5 veces el valor capital.

- h. Implementar beneficios económicos directos para los trabajadores y trabajadoras del sector gastronómico, a fin de paliar los diversos menoscabos experimentados, permitiendo solventar los gastos básicos necesarios para su subsistencia hasta la completa reapertura de los establecimientos.
- i. Finalmente, explorar la posibilidad de impulsar una Ley Gastronómica, a fin de que en situaciones futuras, similares a la pandemia del COVID, dar la posibilidad de que las deudas impagas queden sin interés, por un margen de tiempo, hasta que se normalice la situación de los locales gastronómicos.

Sugerencia de votación:

A favor. Las consecuencias económicas que han sufrido las regiones mencionadas han sido devastadoras, además de considerar los largos periodos en cuarentena que han sufrido, es imperante tomar acciones concretas que vayan en ayuda de este rubro.

- 3. Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita a S.E el Presidente de la República que, si lo tiene a bien disponga: Implementación de medidas para remunerar a las y los cuidadores de adultos mayores, personas postradas y personas con discapacidad.
Boletín N° S 2.153-12

Autores:

- 1. Órdenes
- 2. Allende
- 3. Muñoz
- 4. Provoste
- 5. Rincón
- 6. Araya
- 7. Bianchi
- 8. De Urresti
- 9. Elizalde
- 10. Girardi
- 11. Harboe
- 12. Huenchumilla
- 13. Insulza
- 14. Lagos
- 15. Latorre
- 16. Letelier
- 17. Montes
- 18. Navarro
- 19. Prohens
- 20. Quintana
- 21. Quinteros
- 22. Soria

Objetivo:

Que los cuidadores de adultos mayores, de personas postradas y personas con discapacidad puedan recibir un salario mínimo.

Antecedentes:

- i. Es una tarea ejercida principalmente por mujeres.

- ii. Dada la actual crisis sanitaria y económica, que ha tenido un gran efecto en la tasa de desocupación general, pero aún mayor en las mujeres. Al tercer trimestre del 2020 la tasa de desocupación nacional fue de 11,6% (INE) mientras que la tasa de desocupación femenina alcanzó 11,2% con un aumento de 3,3% producto de la disminución de 14,6% de la fuerza de trabajo femenina
- iii. Indistintamente de las contingencias suscitadas en nuestro país, el cuidado de adultos mayores, personas postradas y personas con discapacidad no ha cesado, y ha debido extremar esfuerzos para proteger la salud.
- iv. Se considera que esta fuerza laboral es un gran aporte al país dado el aumento en la expectativa de vida y además, el envejecimiento de la población.
- v. Se estima que los cuidadores alcanzan las 500.000 personas, de las cuales un 68% son mujeres.
- vi. Lamentablemente el ser cuidador implica postergar el ingreso al mundo laboral, dejando de ser una fuente de ingresos para el núcleo familiar
- vii. Los parlamentarios que proponen el proyecto de acuerdo consideran justo que se garantice un salario mínimo, de manera que ellos puedan asegurar un piso de subsistencia a la vez que ellos permiten la subsistencia de otras personas imposibilitadas. Los Senadores consideran además, que esta medida es perfectamente viable destinando un gasto que es menor al 1% del Producto Interno Bruto.

Sugerencia de votación:

Abstención. A pesar de ser una idea muy altruista, es muy difícil de ejecutar en la práctica ya que no hay un listado oficial de cuidadores, además podría prestarse para fraudes.